

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JOVAN ALEXANDER OSORIO MONTOYA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) tramitado bajo el radicado único nacional No. 05001-31-05-002-2016-01347-01, venido a esta instancia en consulta de la sentencia de primera instancia a favor de la parte actora.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

El actor pretende con la presente demanda, que se declare la nulidad parcial del dictamen N°201591554RR del 25 de marzo de 2015, realizado por Medicina Laboral de Colpensiones, en lo que hace referencia a la fecha de estructuración de la invalidez.

También pretende que se declare que presenta una Pérdida de Capacidad Laboral (en adelante PCL), del 66.4% de origen común y fecha de estructuración sustentada en la historia clínica.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pretende que se condene a COLPENSIONES, a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, expone el actor que nació el 28 de septiembre de 1986, y que, durante su vida laboral, siempre estuvo afiliado a COLPENSIONES.

Relata que el 25 de marzo de 2015, fue evaluado por medicina laboral de COLPENSIONES, quien le estructuró una PCL del 66.4% de origen común y fecha de estructuración del 20 de noviembre de 2010, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.

Indica que el 12 de agosto de 2015, radicó ante COLPENSIONES petición de pensión de invalidez, la que fue negada mediante Resolución GNR7455 del 12 de enero de 2016, indicando que no cumplía el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La oficina judicial de la primera instancia despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda, argumentando que, si bien los dictámenes obrantes en el plenario daban cuenta que el actor padecía una PCL superior al 50%, dada la fecha en que se había estructurado la invalidez, esto es, el 12 de febrero de 2009, no contaba con las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al estado de invalidez, de conformidad con lo establecido en la Ley 860 de 2003.

Adicionalmente, señaló que no era posible la aplicación de la condición más beneficiosa, para recurrir a la Ley 100 de 1993 en su artículo original, porque en todo caso la Corte Suprema de Justicia, había establecido en su jurisprudencia que solo era posible acudir a dicha teoría, si la invalidez se había configurado entre el 26 de diciembre de 2003 y el 23 de diciembre de 2006, lo que no ocurría en este caso, al haber quedado establecida la fecha de estructuración el 12 de febrero de 2009.

En contra de la anterior decisión no se presentaron recursos, motivo por el cual se dispuso el envío del expediente ante esta corporación judicial para surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia en favor del demandante.

3. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, la apoderada judicial de COLPENSIONES y de la parte DEMANDANTE, presentaron escrito de alegatos de conclusión en el que señalaron resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

De conformidad con lo establecido en el *artículo 1 de la Ley 860 de 2003*, por la cual se modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, *“tendrá derecho a la pensión de invalidez, el afiliado al sistema que declarado inválido, acredite las siguientes condiciones: Invalidez causada por enfermedad o accidente que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.*

Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”. Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C – 428 de 2009, resolvió declarar exequible el numeral primero del artículo primero de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y su fidelidad para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%), del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”, la cual fue declarada inexecutable.

La Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, se pronunciaron respecto a los efectos de la mencionada sentencia de la Corte Constitucional, señalando que debe acogerse la fuerza vinculante de la ratio decidendi de las sentencias de tutela de la Corte Constitucional donde se consideró que el requisito de la fidelidad siempre fue considerado inconstitucional y por ello fue inaplicable, por contravenir el principio de progresividad de los derechos, y donde la ratio decidendi se constituye en precedente constitucional que debe acogerse en todo momento cuando se observen

casos con hechos equivalentes, en la medida que el mismo hace parte sustancial del orden jurídico que impone su obligatorio cumplimiento para el operador jurídico.

Descendiendo al caso concreto, obra concepto emitido por Colpensiones en el cual se califica una pérdida del 66.40% de su capacidad laboral estructurada el 20 de noviembre de 2010 mediante dictamen No. 201591554RR del 25 de marzo de 2015.

De acuerdo a lo anterior el afiliado no cotizo 50 semanas dentro de los tres años anteriores al momento de la estructuración de la invalidez.

Dando aplicación al concepto de condición más beneficiosa, es decir aplicación de la norma anterior a la ley 860/2003, para nuestro caso ley 100/1993, el señor OSORIO MONTOYA JOVAN ALEXANDER, Debe acreditar 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la enfermedad.

Artículo 39 ley 100 de 1993. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

Así las cosas, realizado el estudio correspondiente el demandante, tampoco cumple las semanas requeridas por la ley 100 de 1993 para reconocer la pensión de invalidez.

Por lo anterior, no es viable acceder a las pretensiones del afiliado ya que no cumple con ninguna de las condiciones establecidas en la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento de la prestación.

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

De las pruebas aportadas se tiene que el joven JOVAN ALEXANDER OSORIO, nació el día 28 de septiembre de 1986 y de los dictámenes aportados a la demanda, tiene una pérdida de capacidad laboral del 66.4% con fecha de estructuración del 20 de noviembre de 2010, es decir cuando el joven tenía 24 años de edad, según dictamen de COLPENSIONES.

Según dictamen de la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia con fecha de estructuración del 18/03/2010, cuando tenía 23 años.

Y del dictamen de salud pública, establece una fecha de estructuración del 12/02/2009, cuando tenía 22 años de edad.

El artículo 39 de la ley 100 de 1993 establece como requisitos para acceder a la pensión de invalidez, cumplir con las siguientes condiciones: 1) invalidez causada por enfermedad: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

Parágrafo 1. Los menores de veinte (20) años de edad deberán acreditar que han cotizado 26) semanas en el último año o inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. El alto Tribunal Constitucional mediante Sentencia T 777 de 2009 indico que el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe ser aplicado no solo a menores de 20 años sino en general a toda la población joven entre los 14 y 26 años edad, postura que ha sido reiteradas en otros fallos como son la T839 de 2010, T506 de 2012, T-819 de 2013, T-443 de 2014 y T-580 de 2014, entre otros más pronunciamientos de la Corte.

Sentencia T-128/15

"Para el caso de la pensión de invalidez, el legislador quiso dar protección especial a un segmento joven de la población, permitiéndole acceder a dicha prestación originada en enfermedad o accidente no profesional, con unos requisitos menos rigurosos que para el resto de la población colombiana (26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o de su declaratoria); ello, en razón a que los jóvenes se encuentran haciendo tránsito de la vida estudiantil a la vida laboral o en el mejor de los casos realizan las dos actividades concomitantemente. Es apenas obvio que a una persona joven que está iniciando su vida laboral no se le pueden exigir los mismos requisitos para acceder a un derecho prestacional como la pensión de invalidez, que a una persona mayor, con experiencia, pues se presume que la misma viene laborando desde tiempo atrás, bien sea de manera constante o interrumpida, pero que las más de las veces alcanzará a reunir las 50 semanas exigidas en los últimos tres años con anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez que exige la norma".

En lo referente al momento en el cual debieron realizarse las cotizaciones, la norma en comento trae dos proposiciones disyuntivas: la primera precisa que durante el año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez; y la segunda señala que en el último año anterior a la fecha de su declaratoria, *"veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o de su declaratoria"*.

De tal manera que cuando se está estudiando la posibilidad de reconocer una pensión de invalidez a una persona joven, se le pueden tener en cuenta tanto las

semanas cotizadas antes del hecho causante de la invalidez, como las efectuadas con antelación a la declaratoria de la misma.

En este evento, es entonces razonable tener en cuenta a los jóvenes, para efecto del Cómputo de semanas cotizadas, y en consecuencia, para el reconocimiento de la pensión de invalidez, tanto las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración, como aquellas que se realizaron con posterioridad al siniestro pero con antelación a su declaratoria.

De igual manera, es viable extender, como lo ha hecho la jurisprudencia de esta Corporación, el beneficio de exigir sólo 26 semanas de cotización con anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez o de su declaratoria, a los jóvenes menores de 26 años de edad que han visto reducida en más del cincuenta por ciento su capacidad laboral.

Esto por cuanto la Corte después de hacer un recuento de la legislación internacional que rige la materia de la seguridad social y una vez analizadas las disposiciones constitucionales y legales contenidas en la legislación colombiana en lo que respecta al concepto de persona joven, esta Corporación consideró que "(...) *para los organismos internacionales esta etapa de la vida oscila entre los 10 y los 24 años, para la legislación colombiana la misma incluye a las personas que se encuentran entre los 14 y los 26 años*".

Adicionalmente precisó: "*puede concluirse que las normas que pretendan beneficiar al segmento joven de la población, necesariamente deben comprender, en principio, a todas las personas que se encuentran dentro del rango de edad anteriormente señalada, así está contemplado por los organismos internacionales y en esa forma lo ha entendido el Legislador colombiano*".

En esa medida, al realizar una interpretación desde el punto de vista constitucional y no formal del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, puntualizó:

Señaló entonces esta Corporación, que al momento de entrar a analizar casos sui generis como el planteado en el asunto de la referencia, era necesario acudir a una valoración de los principios constitucionales y los derechos fundamentales que le asisten a los jóvenes dentro del marco de un Estado Social de Derecho como el nuestro y que resultan de imprescindible consideración al momento de resolver si les asiste o no el derecho a la pensión de invalidez.

Ello atendiendo a que *"toda lesión que afecte la integridad de una persona y que reduzca su capacidad de proveerse los bienes materiales mínimos para sobrellevar una vida digna, es extremadamente lamentable; pero la situación es más dramática cuando quien debe soportar esta tragedia es una persona joven que apenas termina sus estudios profesionales, comienza su vida laboral y que por los avatares del destino ve cerrados sus sueños, metas y aspiraciones"*.

Lo anterior llevó a que la valoración de elementos como el principio de igualdad y del mínimo vital fueran tenidos en cuenta al momento de analizar los casos en que fueran personas jóvenes las que padecieran el rigor de una invalidez, resaltando la relevancia constitucional del problema, obligando a que el juez constitucional al momento de pronunciarse respecto de la aplicación de las disposiciones legales que rigen la materia, buscara que la misma se hiciera conforme a la Carta Política, de manera que se tengan en cuenta valores y principios constitucionales que necesariamente deben iluminar la lectura de las normas que rigen la prestación de la invalidez. Ello aunado a la especial situación de debilidad manifiesta y al estado de sujetos de especial protección que revisten los jóvenes que padecen tales contingencias, lo que hace necesario desplegar el contenido material, real y efectivo de los principios de solidaridad e igualdad que impregnan nuestra Carta magna.

Una vez hechas las acotaciones anteriores, la Corte afirmó que el parágrafo 1° del artículo 1° de la ley 860 de 2003 preceptuó condiciones más favorables para que el segmento joven de la población colombiana pudiera acceder a la pensión de invalidez; entendiendo por jóvenes aquellas personas que se encuentran entre los 10 y los 26 años de edad.

No obstante, puso de presente un reparo consistente en que el parágrafo del artículo mencionado *"estableció el requisito de cotización de las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez o de su declaratoria, sólo para las personas menores de 20 años"*. En esta medida se precisó que se está ante un déficit de protección de la población joven de Colombia, por cuanto como ya se anotó las disposiciones internacionales, la Constitución y la legislación nacional han definido este segmento poblacional como aquel que está comprendido entre los 10 y los 26 años.

De acuerdo a lo anterior desde el año 2006, cuando apenas tenía 20 años de edad, según historia clínica, el joven JOVAN ALEXANDER OSORIO, presenta graves problemas de salud que le impiden tener una vida laboral activa.

Conforme a lo anterior solicito se REVOQUE la sentencia de primera instancia, toda vez que el demandante cuenta con 47,57 semanas cotizadas en los últimos tres años.

4. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si el actor cumple con los requisitos legales para otorgarle pensión de invalidez de origen común a cargo de COLPENSIONES.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer en consulta del fallo de primera instancia en favor del demandante, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

5. CONSIDERACIONES:

Para resolver la consulta en favor de la parte demandante, sea lo primero manifestar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al sistema general de pensiones debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y las EPS, con base en el manual único para la calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, calificaciones que pueden ser sometidas a consideración de las juntas de calificación de invalidez del orden regional en primera instancia, apelables ante la junta nacional de calificación.

De otra parte, las valoraciones que se emitan en el trámite administrativo son controvertibles ante la Jurisdicción, por lo que los dictámenes que profieren las entidades del sistema de seguridad social no son medios probatorios solemnes y por ello pueden ser valorados por el juez, para establecer la convicción que le merezcan.

Ahora, la valoración a realizar por parte del operador judicial debe partir de las reglas de la experiencia, la lógica, la razonabilidad y la sana crítica, sin pasar por alto el contenido del artículo 226 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que impone criterios objetivos para otorgar mayor credibilidad a una u otra prueba de este tipo.

Específicamente, el inciso 5 de esa norma legal, refiere que el diagnóstico debe ser *claro, preciso, exhaustivo y detallado, en él se explicaran los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.*

En cuanto a la norma legal que regula el tema de la pensión de invalidez, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, señala:

“ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. (...)
2. *Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años **inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.***” (Negritas agregadas)

Sobre las particularidades del caso analizado, el accionante aportó dictamen emitido por **COLPENSIONES** el 25 de marzo de 2015, en la que se le determinó una PCL de **66.40%**, con fecha de estructuración **20 de noviembre de 2010** de origen común (Folio 8 y ss).

Ahora, con ocasión de este proceso ordinario laboral, el juez de instancia ordenó la práctica de otro dictamen pericial por la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**, mismo que fue proferido el 29 de noviembre de 2017, en el que se determinó que el accionante tenía una PCL de **58.10%** de origen común y fecha de estructuración del **18 de marzo de 2010** (Folio 51 y ss).

La parte actora solicitó la aclaración de dicho dictamen pericial, en el sentido de indicar que no podía ser posible que el dictamen estableciera como fecha de estructuración el 18 de marzo de 2010, manifestando que para esa fecha se certifica que se trata de un paciente paranoide, que debe asistir a citas de control y tomar

medicamentos de por vida, cuando en la historia clínica, se observa que dicha enfermedad ya la padecía desde el año 2006, cuando fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide.

A razón de lo anterior, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, el 13 de julio de 2018, aclaró el dictamen proferido, indicando que según la historia clínica, fue a partir del año 2009 que se requirió hospitalización en el caso del actor, y hubo cambio de comportamiento en su patología, comportándose de forma “más agresiva”, por lo que sustentó que la fecha de estructuración era el **12 de febrero de 2009** y no el 18 de marzo de 2010, fecha que por error secretarial involuntariamente se anotó (Folio 63 y ss).

Por estar inconforme con la práctica de dicho dictamen, la parte actora solicitó al juzgado de instancia, la designación de un nuevo perito, a fin de verificar la fecha de estructuración de invalidez, solicitud a la que accedió el Despacho, disponiendo a la **FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, la realización de una nueva valoración médica, entidad que profirió dictamen en el que se determinó que el accionante tenía una PCL del **58.4%**, con fecha de estructuración del **12 de febrero de 2009** (Folio 75 y ss).

Nuevamente la parte actora solicitó la aclaración del dictamen pericial, en lo que hace referencia a la fecha de estructuración de la invalidez, solicitando la revisión completa de la historia clínica, ya que insistía que no tenía sentido que fuera estructurada en el 2009, cuando la misma se presenta desde el 01 de marzo de 2006.

Finalmente, el 02 de diciembre de 2019, la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, dio respuesta a la solicitud de aclaración en los siguientes términos:

“Se toma como fecha de estructuración el certificado emitido por el HOMO (Hospital Mental de Antioquia) del 12/02/2009, donde se certifica que el señor JOVAN ALEXANDER OSORIO MONTOYA, es portador de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, es una enfermedad crónica e incurable que implica gran discapacidad laboral, académica y social, requiere medicación costosa de por vida y asistir a controles periódicos por psiquiatría. Para soportar la decisión de tomar como fecha de estructuración de la patología sufrida por el señor JOVAN ALEXANDER OSORIO MONTOYA, no atenemos a lo estipulado en el Decreto 1507 de 2014, Artículo 3– Definiciones (...) Fecha de estructuración: Se entiende la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier

origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. (Subrayado por fuera de texto). Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral (subrayado fuera de texto). Así las cosas se considera que el certificado del 12/02/2009, expedido por el HOMO, soporta la fecha de estructuración, pues se puede asimilar a un concepto no favorable de rehabilitación, el cual está adecuadamente soportado en la historia clínica y está relacionado con la mejoría médica máxima (MMM) certificado por el médico o entidad tratante. Es de anotar que no es cierto como lo afirma la apoderada del demandante que la fecha de estructuración se asocie a la fecha de la primera atención en salud o a la fecha del primer diagnóstico, pues para ello, siempre mediará en la mayoría de los casos el manejo médico, que de acuerdo a su evolución, dará como resultado la mejoría, curación, control o fracaso de las medidas terapéuticas tomadas, con lo que posteriormente se podrá determinar la fecha de estructuración de la patología (s) objeto de calificación, para ello se requiere que el o los médicos tratantes expidan el certificado de rehabilitación que es una de las herramientas que permite a los calificadores, situar en el tiempo, cuando se obtiene la mejoría médica máxima.

En conclusión, ratificamos que la fecha de estructuración de la patología ESQUIZOFRENIA PARANOIDE que sufre el señor JOVAN ALEXANDER OSORIO MONTOYA, se estableció el 12/02/2009, utilizando para ello el certificado expedido por el HOMO en esa fecha.” (Negritas agregada)

De los hechos narrados, se concluye que aun cuando el demandante tiene una PCL superior al 50% de origen común, se hace necesario acreditar la densidad de cotizaciones prevista en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que dispone que para acceder a la pensión de invalidez causada por enfermedad, se requiere que el afiliado haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de tal estado.

Ahora, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, consagró en el párrafo primero, que cuando se trate de menores de veinte (20) años de edad, sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria, párrafo que fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 del 22 de julio de 2015, en el

entendido que para remediar el déficit de protección, debe extenderse este beneficio hacia toda la población joven que tenga hasta 26 años de edad.

En el asunto de marras, atendiendo la fecha de estructuración del estado de invalidez del actor, el cual finalmente se estableció para el **12 de febrero de 2009**, según los dictámenes proferidos por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, momento para el cual contaba con 22 años de edad por haber nacido el 28 de septiembre de 1986, conforme la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 95 del cartulario, no cuenta con 26 semanas de cotización en el último año antes de la estructuración de la invalidez, esto es, entre el 12 de febrero de 2009 y el mismo día y mes de 2008, pues en este lapso, registra cero (0) semanas cotizadas, como se observa en la historia laboral allegada a folios 89 y siguientes.

De igual forma, tampoco reúne las 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, en la medida que entre el 12 de febrero de 2009 y el mismo día y mes de 2006, cotizó 127 días, equivalentes a 18.14 semanas, acreditando en toda su vida laboral tan solo 47.57 semanas.

Así, las cosas, analizando el material probatorio obrante en el expediente y las actuaciones realizadas en primera instancia en relación con las pruebas periciales decretadas, si bien se tiene certeza que el demandante cuenta con un padecimiento que le produjo una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, lo cierto es que no cuenta con las semanas mínimas requeridas para acceder a dicha prestación.

Corolario de lo dicho, la Sala comparte la decisión de la *a quo*, por lo que no se ve motivo alguno para revocar la decisión de primera instancia, debiendo ser confirmada.

Sin costas en esta instancia por revisarse la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2020 proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **JOVAN ALEXANDER OSORIO MONTOYA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La presente sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3735d704f1f724b4e3072283131eb11918ce357512a6a61ba27eae60cfb3dd3a**

Documento generado en 01/12/2022 02:32:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>